



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

PITTON, MAXIMA (CM) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 2298/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00008879-6/2018-0

Actuación Nro: 11592232/2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de mayo de 2018.-

Vistos y considerando:

1. A fojas 1/14 se presenta **Máxima (CM) Pitton¹**, por su propio derecho, con el patrocinio de Flavia J. Massenzio, e interpone **acción de amparo** contra el **Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires** a fin de que se ordene a la demandada otorgarle un **subsidio reparatorio equivalente al salario mínimo, vital y móvil** para asegurar su **supervivencia**. Ello, en razón de que la marginación por su identidad y expresión de género obstaculiza su acceso al mercado laboral.

Esgrime que dicho subsidio comprende también la **reparación de los daños y perjuicios** padecidos por **discriminación y violencia institucional** promovida por el **Estado** en virtud del accionar de sus **funcionarios policiales** y por su **omisión** de realizar **medidas de acción positivas para la integración social de la población trans**.

Historia que desde muy temprana edad sintió que su cuerpo no la representaba y “*no reflejaba lo que realmente era*”. Relata que en 1991 comenzó a ganarse la vida como transformista en *pubs* y bares, lo que le permitió expresar su autopercepción de género durante el breve lapso de cada espectáculo.

Manifiesta que en 2003 luego del fallecimiento de su madre se mudó a Mar del Plata para realizar shows los fines de semana a cambio de vivienda y comida. Resalta que dicha circunstancia le permitió escaparse de **su entorno que no la aceptaba**.

Expresa que lejos de su familia comenzó su proyecto de convertirse en Máxima Martín, la mujer que desde niña deseaba ser y que para modificar su cuerpo empezó a inyectarse hormonas sin consulta ni seguimiento médico.

¹ Ello, en los términos de los artículos 12 de la ley nacional n° 26.743 y 3 de la ley n° 3.062 los cuales establecen la utilización de un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo y el nombre de pila elegido por razones de identidad de género cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el DNI.

Menciona que en 2012 debió regresar a la CABA para cuidar a su padre a quien le detectaron cáncer y afirma que desde entonces **no ha logrado conseguir trabajo** debido a su identidad de género trans. Asimismo, aduce que actualmente debe habitar junto a su progenitor por **no contar con ingresos para una vivienda** más que una pensión por invalidez.

En torno a su estado de **salud**, alega padecer **depresión** y **angustia** ante la falta de aceptación social y familiar y de **porfiria**, enfermedad cutánea causada por el consumo de fármacos, entre ellos los progestágenos, utilizados para la transformación de su cuerpo. Manifiesta que trata dicha patología en el Hospital Ramos Mejía en donde se le prescribió un tratamiento de dieta y se le prohibió hacer shows o cualquier actividad que requiera esfuerzo.

A su vez, denuncia situaciones de **violencia institucional** por parte de la **policía local** al haber sido requisada e interrogada indebidamente en varias oportunidades. Añade que también fue víctima de **violencia en el sistema de salud** al habersele denegado la debida atención médica en contradicción con lo previsto en el artículo 12 de la ley nacional n° 26.743 de identidad de género.

Esgrime que el GCBA no cumple con el **cupo del 5% de personas trans en el sector público de la Ciudad** establecido en el artículo 5 inciso c) de la ley n° 4.376 en razón de su falta de reglamentación.

Peticiona como **medida cautelar** que se ordene a la demandada otorgarle un **subsido extraordinario y reparatorio mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil** hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Funda en derecho y cita normativa y jurisprudencia que considera aplicables al *sub lite*.

Finalmente, ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y a fojas 17/19 acompaña documental.

2. Corrida la pertinente vista, el **Ministerio Público Fiscal** dictamina sobre la admisibilidad de la vía intentada a foja 21.

Entiende que la acción judicial intentada podría tener posible acogida de ser reconducida en uso de las atribuciones conferidas a través del artículo 5 de la ley n° 2.145 y del CCAyT.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

PITTON, MAXIMA (CM) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 2298/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00008879-6/2018-0

Actuación Nro: 11592232/2018

3. A foja 26 pasan los autos a resolver.

4. Precisiones ordenatorias de las cuestiones a resolver

En atención al estado de autos como primera medida se impone necesario el análisis de la procedencia de la medida cautelar requerida por la actora a fojas 13 vta./14 a fin de que se ordene al GCBA otorgarle un subsidio extraordinario y reparatorio mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil, hasta tanto se dicte sentencia de fondo.

Seguidamente, se indagará en torno a la viabilidad de la acción de amparo elegida por la actora a fin de hacer efectivos los derechos que considera lesionados como consecuencia de la discriminación que sufre por su identidad de género.

A

Estudio de la medida cautelar solicitada en el *sub judice*

I. Requisitos de procedencia de las medidas cautelares

La Corte Suprema de la Nación tiene dicho que el objeto de las mismas “*no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, en el proceso principal sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido*”², en suerte de asegurar la eficacia práctica de la sentencia.

En el análisis de esta clase de medidas es menester partir de la base de que ésta debe significar un anticipo asegurativo de la garantía jurisdiccional. De allí que, dadas las características del procedimiento solicitado *ad cautelam*, no puede pretenderse más que un somero conocimiento de la materia controvertida, encaminado a

² CSJN, Fallos: 314:711, “Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) c/ Provincia de Río Negro s/ su solicitud de medidas cautelares”, sentencia del 24/07/1991.

obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.

Por su parte, la ley de amparo de la Ciudad de Buenos Aires n° 2.145 ha recogido expresamente en su artículo 14 los requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares y exige la acreditación simultánea de los presupuestos de: a) verosimilitud del derecho, b) peligro en la demora, c) no frustración del interés público y d) contracautela, los cuales son aquéllos que la doctrina administrativista ha venido plasmando.

Es con tal mirada, entonces, que se abordará seguidamente si se configuran en autos los extremos requeridos, tanto por la doctrina procesal como por la normativa vigente para la procedencia de la petición *ad cautelam*.

II. Análisis de la concurrencia de los presupuestos cautelares en el *sub examine*

Corresponde entonces analizar si los requisitos precedentes se configuran en esta pretensión *ad cautelam* de acuerdo a las constancias de autos y al marco normativo aplicable.

a. *Fumus bonis iuris*

Éste constituye una posibilidad de existencia del derecho sustancial invocado por la parte y debe reunir cierta apariencia de buen derecho. Su comprobación debe presentarse en forma tal que de un análisis de los hechos, la documentación y particularidades del caso, sea factible avizorar que en el proceso principal pueda declararse la certeza de ese derecho. No se trata de exigir, a los fines de esa comprobación, una prueba plena y concluyente, en tanto la misma será materia de la discusión principal del proceso. Empero es necesario como mínimo cierta **acreditación**³.

1. Sustento que brinda soporte al color de buen derecho

1.1. Desigualdad estructural del contexto que se halla inmerso el colectivo trans

1.1.1. Liminarmente, corresponde develar si este sector social se halla transido de dichos obstáculos y, de ser así, la Sra. Máxima (CM) Pitton tropezaría en su

³ PALACIO, Lino Enrique, *Derecho Procesal Civil*, tomo VIII, pág. 33, n° 1233.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

PITTON, MAXIMA (CM) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 2298/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00008879-6/2018-0

Actuación Nro: 11592232/2018

acceso a derechos básicos como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y la identidad en su condición de mujer trans.

El **decreto nacional n° 1.086/2005** que aprueba el “Plan Nacional contra la Discriminación” **reconoce que la población trans es víctima de una discriminación estructural**, la cual al conjugarse con **la pobreza** incrementa el **estado de vulnerabilidad social**. En tal sentido, en su Anexo consta que “[e]n la actualidad (...) *se siguen violando de manera sistemática y persistentes los derechos humanos de las personas GLTTTBI, configurando graves situaciones de discriminación. A su vez existe una correlación positiva entre pobreza, orientación sexual o identidad de género y discriminación: cuanto más pobres son las personas, mayor es la discriminación y la violación de sus derechos*”⁴ (resaltado añadido).

En idéntica directriz, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que “**la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans inicia a temprana edad**, ya que generalmente son expulsadas de sus hogares, colegios, familias y comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de género diversas. Como resultado, **las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia**”⁵ (resaltado añadido).

En este horizonte de sentido, el estudio⁶ citado en el informe individualizado en la nota al pie presentado ante el Comité CEDAW⁷ explica que la asunción y manifestación social de la identidad de género comienza antes de los 18 años e incluso en el caso de las travestis y feminidades trans en un 85% se manifiestan con

⁴<http://observatoriodiinternacional.com/wp-content/uploads/2014/12/Decreto-1086-2005-DISCRIMINACION.pdf>, pág. 110.

⁵ <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/137.asp>

⁶ El cual fue confeccionado por Lohana Berkins y Josefina Fernández

⁷http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDAW_NGO_ARG_25486_S.pdf

anterioridad. De modo tal que, este proceso personal profundo y complejo se da en simultáneo con la edad escolar lo que los coloca en constantes **situaciones de discriminación por parte de la comunidad escolar**.

Tal circunstancia se proyecta en diferentes investigaciones que evidencian una gran deserción de la escolaridad y arrojan que entre la población trans mayor de 18 años, **6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres abandonaron la escuela en el nivel secundario a causa de la discriminación**. Sólo un **32,6%** de las personas trans relevadas **mayores de 18 años habían completado sus estudios secundarios**⁸.

En el ámbito de la Ciudad, **datos actualizados** relevados por el **Observatorio de Género de la Ciudad**⁹ comprueban que el **59,8% de las mujeres trans y travestis** tiene un **nivel educativo alcanzado inferior al establecido como obligatorio por el Estado** (secundario completo), mientras que para la población en general de la Ciudad, mayor de 25 años, este porcentaje es del 29%. Se advierte, además, que entre las principales causales de abandono de la escolaridad se postulan la falta de dinero y el miedo a la discriminación por parte de sus compañeros, así como de directivos y docentes.

En la **esfera laboral**, los datos demuestran que **6 de cada 10** de las mujeres trans y travestis están vinculadas al **trabajo sexual**. Según la encuesta realizada por el INDEC y el INADI en 2012¹⁰, el **80%** se consigna en la **informalidad laboral** y se menciona que **7 de cada 10** buscaban **otra fuente de ingreso** y **8 de cada 10** **declararon que su identidad les dificulta esta búsqueda**.

La **situación laboral local** refleja similares características dado que sólo el **9%** de los encuestados en la investigación realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad dijo estar **inserto en el mercado formal de trabajo**, al tiempo que el **15%** manifestó tareas informales de **carácter precario** y un **3,6%** vivir de **beneficios** provenientes de diversas políticas públicas. Por su parte, para más del **70%**

⁸ Boletín informativo n° 11,

<https://consejo.jusbaire.gob.ar/acceso/genero/genero/1468A0EB498DB778FD6C6C861BB961B6>

⁹ Boletín informativo n° 13,

<https://consejo.jusbaire.gob.ar/acceso/genero/genero/126ED312CAB3C7009777D391EB88F9F3>.

¹⁰ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en la Primera Encuesta sobre población trans 2012: Travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans. Informe técnico de la prueba piloto Municipio de La Matanza.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

PITTON, MAXIMA (CM) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 2298/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00008879-6/2018-0

Actuación Nro: 11592232/2018

la **prostitución** sigue siendo la principal fuente de ingresos como única alternativa. Incluso entre quienes alcanzaron un nivel educativo secundario o superior a él, **8 de cada 10 nunca lograron acceder a un empleo formal**¹¹.

En lo que respecta al **acceso a la salud**, el INDEC y el INADI¹², indican que **3 de cada 10 mujeres trans o travestis abandonan el tratamiento médico por discriminación** en el ámbito de la salud. Por el mismo factor, **5 de cada 10 dejan de ir a los hospitales**.

A su vez, el **80%** de esta población **no tiene acceso a obras sociales o medicina prepaga**. Tanto a nivel nacional como local, **8 de cada 10 travestis y mujeres trans no cuentan con obra social ni medicina prepaga**, a la vez que perduran en esta población las percepciones vinculadas con la discriminación ejercida por el sistema médico y el maltrato recibido por parte de sus efectores¹³.

Resulta indubitable el protagonismo que interpreta en este escenario el agravante de **automedicación en el tratamiento de reemplazo hormonal (TRH)** debido a la falta de información y de acceso a otros tratamientos. Se ha comprobado que el **86%** de las personas que estuvieron bajo este tratamiento **no realizó ningún control médico**¹⁴.

En cuanto al **derecho a la vivienda**, el INDEC y el INADI revelan que un **46%** de la población trans **habita en viviendas deficitarias**¹⁵. Además, tal como lo evidencia el informe presentado ante el Comité CEDAW, esta población en general **no está incluida en los programas de vivienda** del Estado dado que resultan políticas

¹¹ Boletín informativo n° 13,

<https://consejo.jusbaires.gob.ar/acceso/genero/genero/126ED312CAB3C7009777D391EB88F9F3>.

¹² Op.citado.

¹³ Boletín informativo n° 13,

<https://consejo.jusbaires.gob.ar/acceso/genero/genero/126ED312CAB3C7009777D391EB88F9F3>.

¹⁴ Boletín informativo n° 13,

<https://consejo.jusbaires.gob.ar/acceso/genero/genero/126ED312CAB3C7009777D391EB88F9F3>.

¹⁵ Op. citado.

pensadas desde una perspectiva que sólo incluye a mujeres y hombres cissexuales – personas que se identifican con el género que les fuera asignado al nacer—¹⁶.

En la Ciudad de Buenos Aires, el informe del Observatorio de Género indica que el **número de travestis y mujeres trans que vive en cuartos de alquiler de hoteles, casas particulares, pensiones y departamentos aumentó respecto de 2005**. En aquel año, el 63,7% vivía en tales condiciones mientras que en 2016 lo hacía el 65,1%. A su vez, **el acceso a la vivienda propia disminuyó entre 2005 y 2016 de 8,8 a 5,9%** debido a la **carencia de un trabajo formal**, las mujeres trans y travestis se **ven sistemáticamente impedidas de acceder a contratos de alquiler o a créditos hipotecarios**¹⁷.

Por otra parte, no puede soslayarse que el **3,6%** de las mujeres trans y travestis encuestadas en la CABA **vive en situación de calle**. Éste constituye un argumento para acceder a diversos programas sociales del Gobierno local. Empero, es un beneficio que difícilmente se otorga a mujeres trans y travestis, quienes no consiguen reunir los requisitos que se exigen (recibo de alquiler o documentación de la propiedad elegida para vivir)¹⁸.

En torno a la **violencia estatal**, cabe resaltar que los datos recabados por el INDEC y el INADI exponen que el **83%** de las personas trans y travestis encuestadas han sido **víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial**¹⁹.

Finalmente, se destaca que en el ámbito local el **Observatorio de Género en la justicia ha presentado recientemente la obra “Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer justicia en la Ciudad de Buenos Aires”**²⁰ a fin de exponer la experiencia de este colectivo en su relación con el sistema de administración de justicia. Allí resuenan los testimonios²¹ de Nadir Cardozo, Diana Sacayán y Noelia Luna, quienes han sido víctimas de situaciones de abuso de autoridad por parte del

¹⁶<http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared>

¹⁷[%20Documents/ARG/INT_CEDAW_NGO_ARG_25486_S.pdf](#)

¹⁸Boletín informativo n° 13,

<https://consejo.jusbaires.gob.ar/acceso/genero/genero/126ED312CAB3C7009777D391EB88F9F3>.

¹⁹Boletín informativo n° 13,

<https://consejo.jusbaires.gob.ar/acceso/genero/genero/126ED312CAB3C7009777D391EB88F9F3>.

²⁰ Op. citado.

²¹ RADI, Blas y PECHENY, Mario (Coordinadores), “Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer justicia en la Ciudad de Buenos Aires”, 1ª ed., Editorial Jusbaire, 2018

²² RADI, Blas y PECHENY, Mario (Coordinadores), “Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer justicia en la Ciudad de Buenos Aires”, 1ª ed., Editorial Jusbaire, 2018, pág. 37/42.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

PITTON, MAXIMA (CM) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 2298/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00008879-6/2018-0

Actuación Nro: 11592232/2018

personal policial y dan cuenta de la forma en la que este sistemático obrar discriminatorio fomenta la violencia, represión y persecución de las personas trans.

1.1.2. Del contexto social revelado *ut supra* dimana el grado extremo de vulnerabilidad social al que se halla sometido el colectivo trans desde temprana edad. Así, resultan insoslayables las **implicancias negativas que ello conlleva para la consolidación de la personalidad**, en tanto la **identidad de género** constituye un **pilar esencial de la autodeterminación, dignidad y libertad**.

A su vez, deviene incuestionable que los **obstáculos estructurales de desigualdad** reseñados se presentan como **escollos en el ejercicio de derechos fundamentales** como lo son la salud, la educación, el trabajo y la identidad.

Abonan lo antedicho las palabras esbozadas por Renata Hiller en el marco de la obra citada precedentemente: *“Estas relaciones de discriminación son estructurales, y las categorías no solo existen sino que vienen siendo definidas por esas relaciones sistemáticas de discriminación. La sociedad y el Estado (aquel que garantiza mediante la fuerza y sus otros medios la reproducción de las relaciones sociales) producen y reproducen las relaciones de discriminación y estigma, incluyendo a las relativas al sexo, género, a la orientaciones sexual, a la identidad de género y a la expresión de género, así como la raza y la etnia”*²².

1.2. Cobijo normativo que resguarda a la población trans

1.2.1. Abordaje de la identidad de género por la comunidad internacional

Frente al escenario social descripto, se impone distinguir el desvelo de la comunidad internacional preocupada por combatir los prejuicios sociales, la discriminación y la violencia que se registra contra personas lesbianas, gay, bisexuales, **trans** e intersex (LGBTI).

²² RADI, Blas y PECHENY, Mario (Coordinadores), “Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer justicia en la Ciudad de Buenos Aires”, 1ª ed., Editorial Jusbaire, 2018, pág. 120.

En dicha línea se inscriben los **Principios de Yogyakarta** (2006) sobre la **Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género**²³. En efecto, en el marco del **principio n° 3**, se dispone que los Estados: “*c) adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí; (...) f) emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a todas las personas que estén atravesando una transición o reasignación de género*”.

Con evidentes puntos de conexión, cabe memorar que la **Asamblea General de la OEA**, a través de la resolución sobre “**Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género**” (2010), alentó a los Estados a que tomen todas las medidas necesarias para asegurar que no se comentan violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas en condiciones de igualdad.

A esta idea responde también el reciente informe de la **Comisión Interamericana de Derechos Humanos** sobre la “**Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América**”²⁴, aprobado el 12 de noviembre de 2015. En el mismo, se señala que la violencia, los prejuicios sociales y la discriminación prevalentes en la sociedad en general y en el interior de la familia, **disminuyen las posibilidades de las mujeres trans de acceder a educación, servicios de salud, albergues seguros y al mercado laboral formal, lo que vuelve a dichas personas más susceptibles de ser sometidas a diversas formas de violencia**. De este modo se subraya **la importancia de que los Estados adopten medidas para erradicar el estigma y los estereotipos negativos contra las personas LGBTI, los cuales refuerzan la discriminación y violencia en su contra**.

Así las cosas, surge a las claras que el sistema de derechos humanos transita hacia un indudable afianzamiento de los derechos fundamentales de este colectivo y de la remoción de los obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos.

1.2.2. Recepción del enfoque de género en el ámbito nacional y

²³ <http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/>.

²⁴ <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf>.



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

PITTON, MAXIMA (CM) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 2298/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00008879-6/2018-0

Actuación Nro: 11592232/2018

local

En el ámbito nacional, resulta de igual modo relevante la **ley n° 26.743**²⁵ pues reconoce el derecho humano de toda persona “a) *Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género...*”.

Con pareja perspectiva de género, en la dimensión local, la **ley n° 2.957**²⁶ crea el “**Plan Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual**” –en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos del GCBA, o del organismo que en el futuro asuma sus competencias– con la **finalidad de promover la construcción de una ciudadanía plena, sin discriminación con pretexto de la orientación sexual o la identidad de género de las personas.**

Especialmente, se establece que para el cumplimiento de los objetivos de la ley, se deberán desarrollar las siguientes acciones: “e) *Propuesta e impulso de iniciativas y reformas institucionales y legislativas, destinadas a garantizar el ejercicio de derechos a las personas LGBT y remover obstáculos que les dificulten el pleno ejercicio de sus derechos*” (artículo 3° inciso e).

2. Colofón en torno a la verosimilitud del derecho

2.1. Tanto el sustento coyuntural como normativo revelados *ut supra* imponen a la perspectiva de género como directriz en la función jurisdiccional. Ello, en pos de evitar que el acceso individual a la justicia se postule como otra más de las situaciones asimétricas de desigualdad y exclusión estructural que hostigan al colectivo trans.

En efecto, la pretensión cautelar *sub examine* y los episodios de marginación denunciados por la actora se abordarán a través de una **mirada inclusiva** y serán ponderados **con el especial estándar probatorio** que este tipo de tratos exigen.

²⁵ BO n° 32.404 del 24/05/2012.

²⁶ [BOCBA n° 3107 del 30/01/2009.](#)

Ello, no sólo por el prematuro estado de la presente acción sino por la sabida complejidad que encarna el hecho de probar un accionar discriminatorio.

2.2. En tal sentido, se advierte que los tratos desiguales y las situaciones de violencia institucional alegadas por la Sra. Pitton de ningún modo resultan ajenas al contexto de discriminación estructural al que se halla expuesto el colectivo trans, de conformidad con el contexto social deslindado en el apartado A.II. a.1.

Se destaca en especial la mención actora de que su condición de trans le ha significado una **barrera para ingresar al mercado laboral formal**, lo que no sólo ha derivado en un bloqueo de su **desarrollo personal y profesional** sino que también le impide **acceder a una vivienda por sus propios medios** (*vide* foja 2 vta.).

A su vez, resulta insoslayable que la Sra. Pitton no cuenta con una **obra social o medicina prepaga** para tratar las secuelas de su tratamiento hormonal. Tampoco pueden desatenderse las situaciones de **violencia y maltrato institucional** que denuncia por parte de los agentes policiales (*vide* foja 2/2 vta.).

Finalmente, no puede obviarse, además, que su identidad autopercebida con un género distinto al sexo atribuido al nacer ha irrumpido en su entorno familiar el cual ha tenido como primera respuesta la minimización y la negación, con la esperable repercusión en la consolidación de su personalidad e identificación como mujer (*vide* fojas 1/2 vta.).

En razón de los valladares citados, se concluye entonces que **la actora no puede, por el momento, procurarse de forma autónoma los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades mínimas ni superar el extremo en el que se encuentra.**

Bajo tales premisas, se verifica que la **verosimilitud del derecho se encuentra *prima facie* acreditada.**

b. Peligro en la demora

La exigencia de este requisito responde a la necesidad de impedir que el derecho bajo reclamo pierda su virtualidad o eficacia, de forma previa al pronunciamiento de la sentencia definitiva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha expresado en tal sentido que es necesaria “*una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el*



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

PITTON, MAXIMA (CM) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 2298/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00008879-6/2018-0

Actuación Nro: 11592232/2018

objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia”²⁷.

A tenor de lo expuesto en el apartado A.II.a.1., se halla evidenciado el extremo estado de vulnerabilidad social de la amparista por formar parte de un colectivo históricamente sometido a situaciones de desigualdad social estructural, circunstancia que le **imposibilita cubrir sus necesidades básicas**. Dados su permeabilidad para su plan de vida y el carácter alimentario de tales necesidades se agrava el peligro que el mantenimiento de tal situación conllevaría.

Por ende, se encuentra configurado en el caso el **peligro en la demora**.

c. Interés público

Se estima que nada afecta más al mismo que la posible conculcación de derechos de tal elemental raigambre constitucional como los enunciados precedentemente. El otorgamiento de la medida *ad cautelam* en autos no se advierte como un escollo frente a su ponderación, sino más bien, su salvaguarda. Razón por la cual el abordado requisito **se compadece con sendos recaudos reunidos precedentemente**.

d. Contracautela

Ésta tiene por objeto “*asegurar los eventuales daños que pudiesen derivar de la obtención de la medida*”²⁸.

²⁷ CSJN, Fallos: 319:1277, “Milano Daniel Roque c/ Estado Nacional (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación)”, sentencia del 11/07/1996.

²⁸ COLOMBO, Carlos J. y KIPER, Claudio M.; “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado”, tomo II, editorial La Ley, Buenos Aires, 2006, pág. 504.

La situación de extrema vulnerabilidad sumariamente acreditada en el *sub lite* permite entender que resulta suficiente la caución juratoria prestada en su libelo inicial a tenor de lo manifestado a foja 14.

Por las razones expuestas, **se consideran configurados** en estos obrados -con la precariedad que caracteriza el marco cognoscitivo del proceso cautelar- **los requisitos de procedencia de la medida solicitada.**

III. Decisión en torno a la conducta que deberá observar la demandada

La actora requiere que se ordene cautelarmente al GCBA que le otorgue un **subsidio extraordinario y reparatorio mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil** hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

No obstante ello, de conformidad con el **artículo 184 del CCyT**, se impone la facultad del tribunal para ordenar una precautoria diversa de la solicitada, con especial énfasis en la importancia del derecho o interés que se intenta proteger.

En tal sentido, ante el extremo estado de vulnerabilidad social y discriminación estructural en el que se halla la amparista y en este estado del estado larval del proceso, se advierte que la misma podrá encontrar el resguardo de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la salud, a la vivienda y al trabajo en las medidas de **asistencia alimentarias** contenidas por la ley **n° 1.878**²⁹ –Programa “Ciudadanía Porteña. Con todo derecho”– y el **decreto n° 800/08**³⁰ –Programa “Ticket Social”–, **habitacionales** creadas por el **decreto n° 690/06**³¹ y sus modificaciones³² –Programa

²⁹ Sancionada el 1º/01/2005, publicada el 19/01/2006 en el BOCABA n° 2362, modificada por las leyes n° 2.062 y 2.408 y reglamentado por el decreto n° 249/14

³⁰ BOCBA n° 2.970, del 14/07/2008.

³¹ Emitido el 08/06/2006 y publicado el 21/06/2006 en el BOCABA n° 2463, conjuntamente con la resolución n° 1.554/MDS/08 que aprueba su reglamentación

³² **Artículo 5** “Establécese el monto del subsidio a otorgar en una suma total de hasta pesos cuarenta y ocho mil (\$ 48.000), abonado en un **máximo de doce (12) cuotas mensuales y consecutivas** de hasta pesos cuatro mil (\$ 4.000) cada una. **Facúltase a la Autoridad de Aplicación para extender el presente subsidio por plazos de seis (6) meses**, pagaderos en cuotas mensuales y consecutivas de hasta pesos cuatro mil (\$ 4.000) cada una, dependiendo de cada caso particular y si la situación de vulnerabilidad social del beneficiario así lo amerita. Alternativamente, la Autoridad de Aplicación podrá disponer el pago del subsidio en una (1) cuota única de hasta pesos cuarenta y ocho mil (\$ 48.000), en los casos en que el beneficiario, al momento de ingreso al Programa, acredite fehacientemente la posibilidad de obtener una salida habitacional definitiva y concreta y ejerza la opción requiriendo dicho pago único. Establécese que el ejercicio de la opción por parte del beneficiario a percibir el subsidio alternativo en una (1) cuota única por salida definitiva resulta excluyente de la percepción de toda otra suma de dinero dispuesta en el presente Decreto” (texto según artículo 1 del decreto n° 637/16).



JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 6 SECRETARÍA
N°11

PITTON, MAXIMA (CM) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

Número: EXP 2298/2018-0

CUIJ: EXP J-01-00008879-6/2018-0

Actuación Nro: 11592232/2018

“Atención para Familias en Situación de Calle”– y **laborales** dispuestas mediante el **decreto n° 578/2008**³³ –Programa de “Formación e Inclusión para el Trabajo”–.

Por estas razones, se concluye que el GCBA debe garantizar la **subsistencia adecuada** de la actora a través de su incorporación en los distintos programas que le permitan el acceso a la **alimentación, a la vivienda digna y al mercado laboral formal** de consuno con el sustento coyuntural y normativo deslindado en *ut supra*. Ello, a fin de **erradicar el estigma y los estereotipos negativos contra las personas LGBTI, los cuales refuerzan la discriminación y violencia en contra de la actora.**

A su vez, deberá **colaborar en forma conjunta en la búsqueda de alternativas de superación de la crisis de aquélla** con una evaluación del avance o dificultades en la obtención de propuestas a tal fin e informar detalladamente y dentro del plazo de dos meses en las presentes actuaciones. Asimismo, en el término de cinco días deberá informar el cumplimiento pormenorizado de la presente medida.

B

Viabilidad de la acción de amparo

Analizada la procedencia de la medida cautelar en el apartado precedente, corresponde ingresar en el examen de la admisibilidad de la vía intentada.

La pretensión actora incluye la **reparación de los daños y perjuicios** por la **discriminación y violencia institucional** padecida con motivo de su identidad de género. Ahora bien, de la propia letra del artículo 3° de la ley n° 2.145 surge que “**no será admisible el reclamo de daños y perjuicios en la acción de amparo**” (énfasis añadido).

Ello lleva a concluir que no se encuentran configurados en el *sub judice* los requisitos de admisibilidad formal de la acción de amparo.

³³ BOCBA n° 2.942, del 02/06/2008.

Por ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5° de la ley n° 2.145, corresponderá **reconducir la presente acción** y, por ende, enderezar el proceso de consuno las normas contenidas en el Título VIII del CCAyT.

A mérito de las consideraciones precedentes, **SE RESUELVE:**

1º) Ordenar -en los términos del artículo 184 del CCAyT- **al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en el término de cinco (5) días incorpore a la Sra. Máxima (CM) Pitton (DNI 23.126.504) en los programas estatales que le brinden asistencia alimentaria, habitacional y laboral, de conformidad con lo expuesto en el apartado A.III. Todo ello, hasta tanto se resuelva en forma definitiva y firme en estas actuaciones.**

2º) Tener por prestada la caución juratoria en atención a lo manifestado en el punto IX.4 de foja 14.

3º) El GCBA deberá informar detalladamente y dentro del plazo de cinco (5) días en las presentes actuaciones el cumplimiento pormenorizado de la presente medida y dentro de dos (2) meses presentar la evaluación del avance o dificultades en la obtención de propuestas en la búsqueda de alternativas de superación de la crisis de la actora.

4º) Reconducir la acción de amparo interpuesta y, en consecuencia, enderezar el proceso conforme las normas contenidas en el Título VIII del CCAyT.

5º) Intimar a la actora a efectos de que adecue su demanda a la normativa antes referida en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de archivar las presentes actuaciones.

Regístrese y notifíquese a la actora y al Ministerio Público Fiscal en su público despacho.